



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Paraná, 23 de marzo de 2023.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y la Dra. Beatriz Estela ARANGUREN, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 63/2020/24/CA12: **"INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DE STEFANI, JOSE RICARDO; RPB S.A.; BAGGIO, RUFINO PABLO; VERONESI, DIANA BEATRIZ Y OTROS EN AUTOS STEFANI, JOSE RICARDO; RPB S.A.; BAGGIO, RUFINO PABLO Y OTROS POR ESTAFA - INFRACCION ART. 303 - EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA Y OTROS"**, proveniente del Juzgado Federal de Gualeguaychú, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Leonardo Carnevali y Melisa De Felipe, contra la resolución obrante a fs. 43/47, en cuanto no hace lugar al planteo de incompetencia formulado por la defensa de los nombrados. El recurso es concedido a fs. 62.

En esta instancia, se celebra la audiencia preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el conste actuarial de fs. 72, agregándose los memoriales del Dr. Fabián Moreno Navarro en defensa de Leonardo Carnevali y de Melisa De Felipe, y del Dr. Gustavo Suriz, en defensa de Leonardo Carnevali; del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Dr. Néstor Paulette, en carácter de apoderado de la querellante RPB S.A.; y del Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez, (cfr. línea de Actuaciones Sistema Lex100) quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, los Dres. Moreno Navarro y Suriz sostuvieron que sus defendidos han sido indagados y procesados por un Juez Federal, únicamente, por un delito ordinario; que esta Alzada ha confirmado sus procesamientos, y que un Fiscal Federal ha requerido su sometimiento a juicio ante un tribunal oral federal, por el mismo delito.

Hicieron un relato del devenir de las presentes actuaciones y sostuvieron que habría cantidades de dictámenes del Fiscal General y resoluciones de esta Alzada en las que, al tiempo en que confirmaron decisiones del a-quo, le encomendaron que de un modo rápido y eficaz, fundara adecuadamente la competencia federal.

Refirieron al planteo de incompetencia realizado por esa parte y al dictamen del agente Fiscal.

Mencionaron los fundamentos expuestos por el Magistrado en la resolución recurrida; y respecto al eventual delito cambiario, remarcaron que la formulación de cargos y la producción de la prueba es competencia del BCRA -art. 8 del RPC- por lo que la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

comisión de alguno de los delitos previsto en el RPC de ningún modo asignaría competencia al a-quo.

Sostuvieron que tampoco se habría iniciado una causa por algún delito de la Ley Penal Tributaria, y en cuanto a lo referente al lavado de activos, remarcaron que ese delito supone exactamente la actividad contraria a la que se investiga en el caso, y que tuvo por acreditada el a-quo.

Agregaron que procurar ampliar el objeto de investigación para incluir en él nuevos hechos que puedan fundar una imputación por algún delito federal, es ilegítimo. Citaron jurisprudencia.

Respecto a la afirmación de que la cuestión de competencia ha sido holgadamente tratada y resuelta en tres incidentes de incompetencia que se encuentran firmes, pusieron de resalto que esos incidentes referían a hechos distintos de los investigados en este caso.

Indicaron que la jurisprudencia citada en la resolución apelada postula soluciones contrarias a las resueltas en las presentes, por lo que su invocación se debe a una confusión o bien es engañosa.

En cuanto al argumento de que la remisión de la causa a la justicia provincial implicaría un dispendio jurisdiccional, expresaron que *"se nos escapa por qué la remisión de la causa a los jueces dispuestos por la ley antes del proceso implicaría un dispendio jurisdiccional"*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Hicieron mención a los principios y garantías constitucionales vulnerados en la resolución recurrida -afectación a la garantía de juez natural, e intromisión del poder federal en la órbita de las competencias provinciales en contraposición con el régimen federal adoptado por la CN-.

Expusieron que ya habrían pasado tres años desde el inicio de las actuaciones y el a-quo aún no se habría expedido respecto a su competencia para seguir interviniendo en autos.

Solicitaron que se revoque la resolución apelada, y se disponga la incompetencia de la Justicia Federal para continuar entendiendo en las presentes actuaciones. Hicieron reserva del caso federal.

b) Que, por su parte, el Dr. Néstor Paulette sostuvo que el planteo efectuado resulta tardío, destemplado, dilatorio y obstruccionista, toda vez que ha sido enarbolado en varias oportunidades y éste, en particular, no resultó novedoso a las peticiones ya examinadas oportunamente.

Remarcó que la competencia del fuero federal se funda en el hecho que se investigan delitos de indubitable competencia federal, tales como evasión tributaria, violación al RPC y lavado de dinero; y que el mero hecho de que se haya desdoblado la investigación no hace caer la competencia federal, ya que se trata de facultades propias del instructor que fueron ejercidas de manera razonable.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Indicó que se encontraría pendiente el informe final de AFIP con la determinación de oficio del tributo y la pericia de la PFA, que serían pruebas medulares sobre las que se sustenta la competencia federal.

Entendió que se encontraría probado el hecho ilícito que da lugar a las imputaciones por lavado, por lo que no habría lugar a dudas de que resultaría irrazonable remitir la causa a la justicia provincial bajo cualquier argumento.

Solicitó que se rechace el recurso de apelación interpuesto.

c) Que, a su turno, el Sr. Fiscal General refirió a los antecedentes de la causa, y sostuvo que la resolución recurrida muestra una insuficiente carga motivacional respecto al planteo de excepción de incompetencia formulado por la defensa de Carnevali y de De Felipe, por lo que no satisface el requerimiento contenido en el enunciado del art. 123 del CPPN.

Entendió que la desvinculación absoluta que implicaría convalidar el resolutorio, comprendería hechos cuyas cualidades jurídicas aun reclaman de suficientes esmeros argumentativos siempre que el fuero pretenda sostener su habilitación de modo jurídicamente adecuado. Es decir, el único bien jurídico que a la fecha se muestra afectado de modo inobjetable resulta ser la propiedad privada -y ningún





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

otro según la instrucción que parece concluir- por lo que debería intervenir otra jurisdicción para conocer el caso o, aportarse razones suficientes, serias, coherentes y convincentes para retener su trance en la remitente.

Remarcó que la fundamentación del auto se basa en la hipótesis que vienen siendo esgrimidas desde el inicio de la causa, y que hasta donde alcanzó, no hubieran de recibir concreción o suficiente madurez o verosimilitud para la individualización de algún hecho que habilite de modo concluyente la competencia federal. Citó jurisprudencia.

Opinó que la racionalidad reconstructiva que exige un procedimiento debido según lo exige el Estado de Derecho, requiere de motivaciones suficientes, según el art. 123 del CPPN; y que de aceptarse esta interpretación, ella conduciría a la nulidad del auto en los términos del art. 168 del CPPN.

Agregó que las supuestas razones que se aducen en el auto reposan en posibilidades, mostrando -ex re- su insuficiencia actual de conformidad con la evolución de una causa de tres años; y que la contención de una causa no se lleva bien con escisiones o fragmentaciones cognitivas.

Sugirió, además, que el Tribunal conceda un plazo prudente y breve al instructor, a fin de permitirle que, mediante los informes que se dicen





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

pendientes de respuesta, pueda cerrarse o reducirse la apertura del horizonte meramente conjetural que se viene evocando, para definir la cuestión.

II- a) Que, las presentes tienen inicio con la **denuncia** realizada por Rufino Pablo Baggio - accionista de la empresa RPB S.A.- en fecha 22/01/2020, donde indicó que el 03/01/2020 recibió un correo electrónico por parte de Juan Alejandro Baggio, que informaba que el día anterior el Directorio de RPB S.A. había sufrido un siniestro que podría ser catalogado de fraude o estafa. La maniobra había sido detectada por una alerta de transacciones al exterior efectuada por el Banco Santander; en razón de ello la firma había iniciado una investigación interna, que derivó en una denuncia que dio origen al Legajo N° 77/2020 a cargo del Fiscal N° 1, de la justicia provincial, Guillermo Biré.

Asimismo, el denunciante acompañó copia de la **denuncia** realizada por **Diana Veronesi**, donde se destaca que: el 4/12/19 recibió una llamada -en la empresa-, del Sr. Adrian Clamp de KPMG, el cual fue atendido por una compañera suya. Clamp le pidió ratificar el correo electrónico de Ricardo Stefani y el de la denunciante, lo cual fue brindado por Jimena Grané. Ese mismo día, habría recibido un correo, encabezado como Juan Alejandro Baggio, mail@smtp074.com, donde le indicó que, con absoluta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

reserva, le iba a pasar un correo, donde se le indicaría las operaciones internacionales a realizar.

Que el mismo día, recibió un correo, con dominio juan.baggio@proliaemail.com; asunto 'CONTACTO CON SEÑORCLAMP'; encabezado Juan Alejandro Baggio donde se nombraba al señor Adrian Clamp, de la auditoria KPMG, envió entre paréntesis el correo adrian.clamp@kpmg-corp.com, solicitando realizar una transferencia de un primer anticipo por un importe de U\$S 982.765, con estricta confidencialidad y recalcando la obligación de no hablar de esto con la empresa. Posteriormente se recibió del mismo mail anterior (de J.A. Baggio), que se solicitara la factura directamente al Sr. Clamp. Que el supuesto correo de J.A. Baggio le reenvió las facturas anexas de la transferencia antes detallada la que se hizo desde la cuenta de RPB S.A. del Banco Santander Rio, hacia el Banco Estandar Chartered Bank (HongKong).

Que el 5/12/2019, se efectivizó el primer pago, por el monto de U\$S 487.088. El mismo día, salió el pago de la segunda factura por U\$S 495.677, desde y hacia las mismas cuentas informadas precedentemente. El 9/12/2019, se recibió otro mail del supuesto J.A. Baggio con la orden de hacer el siguiente pago, por U\$S 2.875.347 y le especificó que las transferencias se dividan en tres. Que el día 12/12/2019, se recibió un correo del mismo remitente, que tenía que realizar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

otro pago, por U\$S 3.954.515, dividido en cuatro facturas, de las que solo tres fueron efectivizadas.

Que, antes de efectivizar el cuarto pago, se comunicó el señor Diego Maldonado (Gerente Regional del Banco Santander) y Fabiana Berardo (Gerente de Comercio Exterior del Banco Santander), pidiéndole a la denunciante explique a que transacción correspondían todos los movimientos mencionados, a lo cual Veronesi respondió que tenía poca información, y supuestamente el Presidente de la Empresa J.A. Baggio, le exigió absoluta confidencialidad, por lo que al no brindar dicha información, la última operación no fue aceptada.

Que atento a ello, el Sr. Clamp, se contactó con la nombrada -vía email-, en donde anoticiado de lo que el banco le estaba requiriendo, le ofreció cambiar de cuenta, y le anexó dos contratos de servicios, con la firma de J.A. Baggio. Previo a esto, el supuesto J.A. Baggio solicitó a la denunciante el envío de su firma escaneada.

Continuando con el mismo modus operandi, se siguieron enviando mails con el correo del supuesto J.A. Baggio, insistiendo en la posibilidad de abonar la factura restante a otra cuenta solicitada por el señor Clamp.

Que ese día la denunciante recibió un llamado del Sr. J.A. Baggio consultando a que correspondían todas las operaciones, que le había





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

comunicado en los informes diarios, donde se especifican todas las operaciones bancarias realizadas, a lo cual la denunciante le contestó que son las operaciones que él le había solicitado vía mail, desde el 4/12/2019. En ese momento se dio cuenta la denunciante de que la extensión del correo de J.A. Baggio, no era la misma que el utiliza habitualmente - alejandro@baggio.com.ar -, y que la apócrifa era juan.bagio@prolioemail.

Que en ese momento en estado de shock le dio el teléfono a su inmediato superior, Ricardo Stefani, Gerente Financiero y luego se comunicó el incidente al área legal y se procedió a realizar la presente denuncia. (cfr. denuncia obrante en la línea de Actuaciones Sistema Lex100).

Por su parte, la **denuncia** formulada por Rufino Pablo Baggio fue dirigida contra Juan Alejandro Baggio y Diana Beatriz Veronesi por los hechos referidos, los cuales habrían constituido para él una maniobra de **estafa, vaciamiento de la empresa, lavado de activos, evasión tributaria e infracción al régimen penal cambiario**.

b) Conforme surge de las actuaciones obrantes en el Sistema Lex 100, el Fiscal Federal formuló el requerimiento formal de instrucción, en el que no hay una indicación precisa de los delitos por lo cual realizaba dicha presentación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Sin embargo, al requerir la inhibitoria de la justicia provincial de lo actuado en virtud de la denuncia realizada por la Sra. Diana Beatriz Veronesi, señaló que "... de tal causa se desprende claramente que el objeto de la misma gira en torno a la posible comisión de un **delito de defraudación contra la empresa R.P.B. S.A.**, el cual en razón de la materia seria de competencia ordinaria. Sin embargo, habida cuenta los dichos esgrimidos por el denunciante Rufino Pablo Baggio, lo cual a simple apreciación parecieran referirse al mismo objeto procesal pesquisado en el legajo que se sustancia ante el fuero provincial, este Ministerio Público entiende que la maniobra ilícita denunciada abarcaría una hipótesis de investigación más amplia que la planteada en sede provincial ya que como se ha referido debe descartarse o no la comisión de **ilícitos de competencia federal -delitos contra el orden económico y financiero, régimen penal cambiario y/o régimen penal tributario-**".

c) Que, con dicha base fáctica, el Magistrado a-quo dispuso -entre otras cuestiones- recibir declaración indagatoria a Diana B. Veronesi, Leonardo A. Carnevali, Daiana Gutiérrez, y Melisa A. De Felipe, y en fecha 28/09/2020 dictó el procesamiento de la primera de las nombradas por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de **administración fraudulenta**, de conformidad al art. 173, inc. 7º, en función del art.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

172, del CP; y del resto de los nombrados como participes necesarios del delito mencionado precedentemente.

Contra esa resolución se alzaron las defensas de los nombrados dando lugar a la intervención de esta Alzada, que en fecha 04/08/2021 confirmó el procesamiento respecto de Veronesi, Carnevali y De Felipe; dictó la falta de mérito con relación a Daiana Gutiérrez; y encomendó al a-quo que tenga presente la necesidad de enriquecer la base investigativa de un modo tal, ágil y oportuno como resulte necesario para sostener la competencia del fuero federal en las presentes actuaciones, tal como lo había expresado el Tribunal en fecha 02/07/2021 en el incidente N° FPA 63/2020/9/CA7.

Que en fecha 29/3/2021 se le recibió declaración indagatoria a Ricardo José Stefani, y el 13/04/2021 resolvió dictar su procesamiento por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta de conformidad al art. 173, inc. 7, en función del art. 172, del CP. Contra esa resolución se alzó la defensa, dando lugar a la intervención de este Tribunal, que en fecha 02/07/2021 resolvió rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Por otro lado, el a-quo en fecha 02/11/2020 amplió la indagatoria de Veronesi, imputándole el haber utilizado las facturas apócrifas, para





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

gestionar, autorizar y ordenar las transferencias en cuestión; y el día 05/11/2020, resolvió ampliar el procesamiento de la nombrada, por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de **uso de documento público falso** (art. 296 en función del art. 292 del CP) en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta (art. 173, inc. 7 en función del art. 172 del CP).

Dicha resolución fue apelada por la defensa de la imputada, y en fecha 05/08/2021 este Tribunal declaró la **nulidad** de la resolución por carecer de fundamentación suficiente de conformidad con el art. 123 del CPPN.

Así, una vez devuelta las actuaciones al Juzgado, el Magistrado a-quo, en fecha 19/08/2021 resolvió ampliar el procesamiento de Veronesi, por considerarla autora penalmente responsable del **delito de administración fraudulenta en concurso ideal con el delito de uso de documento privado falso** de conformidad al art. 173, inc. 7, en función del art. 172, art. 296 en función del art. 292 del CP.

Contra esa resolución se alzó la defensa dando lugar nuevamente a la intervención de este Tribunal, quien la confirmó el 21/10/2021, y volvió a encomendar al a quo tenga en consideración la mención acerca de la necesidad de enriquecer la base investigativa de un modo tal, ágil y oportuno como





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

resulte necesario para sostener la competencia del fuero federal en las presentes actuaciones.

d) Que, en fecha 13/05/2022, el a-quo proveyó que *"Estimando completa la instrucción respecto de los imputados Diana Beatriz Veronesi, Ricardo José Stefani, Melisa A. De Felipe y Leonardo A. Carnevali, córrase vista a la parte querellante por el término de ley de conformidad con el art. 346 del Código Procesal Penal de la Nación"*.

Así, la parte querellante RPB S.A. en fecha 31/05/2022, solicitó la elevación de la causa a juicio contra los nombrados por el delito de administración fraudulenta (art. 173, inc. 7 en función del art. 172 del CP; y respecto a Veronesi agregó el delito de uso de documento privado falso (art. 296 en función del art. 292 del mismo cuerpo legal), en concurso ideal, conforme lo establece el art. 346 y 347 del CPPN.

En la misma fecha la defensa de Carnevali y de De Felipe solicitaron la nulidad del decreto de fecha 13/05/2022, ya que -a su entender- constituiría un alzamiento contra instrucciones precisas que impartiera esta Alzada -en cuanto a fundamentar la competencia de este fuero federal-, y porque ese decreto contendría la decisión infundada de dividir la causa, infringiéndose lo establecido por el art. 123 CPPN. Dicha solicitud fue rechazada por el a-quo y confirmada por este Tribunal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Que, en fecha 06/07/2022 el Sr. Fiscal Federal Subrogante, Dr. Pedro Rebollo formuló el requerimiento de elevación a juicio con relación a las personas imputadas, destacando que la calificación legal escogida por el a-quo en cuanto a Veronesi encuentra adecuación típica en los delitos de **administración fraudulenta en concurso ideal con el delito de uso de documento privado falso** (arts. 173 inc. 7, en función del art. 172; art. 296 en función del art. 292, todos del C.P.); y en relación a los demás procesados, sus conductas encuentran adecuación típica en el **delito de administración fraudulenta** (arts. 173 inc. 7, en función del art. 172 del C.P.).

Asimismo, solicitó la extracción de testimonios a fin de continuar con la investigación de los hechos relacionados con los delitos económicos, tributarios y cambiarios.

Como consecuencia de ello, el día 25/07/2022, el Magistrado a-quo notificó a las partes de conformidad al art. 349 del CPPN, e hizo saber que la defensa podría deducir únicamente excepciones no interpuestas con anterioridad u oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.

Posteriormente, los defensores de Carnevali y de De Felipe, contestaron la vista por el art. 349 del CPPN, -y en lo que a esta incidencia respecta- opusieron excepción de incompetencia, por considerar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

que los delitos investigados son de competencia de la justicia ordinaria.

Así, formado el incidente de incompetencia, y oído a las partes, el Magistrado a-quo en fecha 16/12/2022 resolvió -en lo que aquí interesa- no hacer lugar al planteo de incompetencia formulado por dicha parte.

Contra dicha resolución se alzó la defensa de los imputados dando lugar a la intervención de este tribunal.

III- a) Que, a fin de resolver la cuestión venida a estudio, cabe reseñar que los defensores de los imputados Carnevali y De Felipe han solicitado que se declare la incompetencia federal para el caso, atento que, como se indicara, el delito imputado a los nombrados -arts. 173 inc. 7, en función del art. 172 del C.P.- es un delito ordinario, que nada tendría que ver con la órbita federal; por el cual ya se habría clausurado la instrucción y corrido la vista por el art. 349 del CPPN, tal como fuera expuesto *ut supra*.

Tal postulación fue rechazada por el Sr. Juez a-quo, quien centró su fundamentación en que "*los hechos podrían constituir delitos de competencia federal -delitos contra el orden económico y financiero, régimen penal cambiario y/o régimen penal tributario, y... que las medidas que fueron dispuestas [aún pendientes] hasta el momento tienden a corroborar o descartar tales extremos*".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Además, sostuvo que *"a los fines de una mejor administración de justicia y con el objeto de evitar el dispendio jurisdiccional que implicaría la remisión de la causa a la justicia ordinaria... corresponde continuar con la presente investigación en este fuero"*.

b) Que, llegados a este punto, se recuerda que es doctrina recibida por este Cuerpo que al órgano jurisdiccional le corresponde realizar un "juicio de habilidad" -en estadios distintos del proceso- tendiente a verificar el presupuesto procesal "competencia" y por el cual merece un doble orden de análisis: el primero, respecto a la procedencia de la jurisdicción federal u ordinaria y, en segundo término, cuál es el tribunal territorialmente idóneo, cualquiera sea la conclusión respecto al primero.

Que, en seguimiento de tales pautas, cabe interrogarse si la justicia federal resulta o no competente para entender en la presente causa, a tenor del marco fáctico existente y demás normas pertinentes.

En tal sentido, resulta imprescindible determinar si en el caso se verifica una plataforma fáctica con entidad suficiente para dirimir la cuestión de competencia instada por las defensas de Carnevali y De Felipe.

Hemos señalado en reiteradas oportunidades que las declaraciones de competencia deben hallarse





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

precedidas *prima facie* de la investigación elemental necesaria, para encuadrar el caso en alguna figura determinada (cfr. en tal sentido C.S.J.N., "FCA", agosto 18-994, repertorio ED 29, 837, sums. 61 y 72).

Asimismo, en este sentido, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "... las declaraciones de competencia deben hallarse precedidas de una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa y encuadrarlos en alguna figura determinada, pues sólo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del Juez a quien corresponde investigarlo..." (C.S.J.N. C. 1181. XLIII; COM, "Cervantes, Andrés s/ defraudación", rta. 01/04/2008).

Que, conforme con lo expresado precedentemente, en el caso se advierte no solo el avance de la investigación a lo largo del tiempo -3 años- sino además que, como se expuso, el Magistrado a-quo consideró agotada la instrucción y corrió la vista por el art. 346 del CPPN, a los fines de elevar la causa a la instancia de debate, contando con dictamen de la querella y del Ministerio Público Fiscal.

Cabe aquí recordar que "el requerimiento de elevación a juicio proporciona la plataforma fáctica sobre la que habrá de discurrirse en el debate. Esa "... relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos..." es su elemento axil, entendiendo esto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

literalmente pues es el eje sobre el que se desarrollará todo el debate... Se obtiene mediante la mención detallada de todas las circunstancias de tiempo modo y lugar en que la conducta del imputado se exteriorizó y cualquier otro dato de interés para el encuadramiento legal del hecho y la selección y graduación de la penal. ...El juicio penal tiene su base y su límite en el requerimiento fiscal de elevación a juicio y la hipótesis del hecho contenida en la acusación circunscribe la actividad de todos los supuestos del proceso: defensa del imputado, prueba, discusión y decisión definitiva del tribunal (TSJ Córdoba, Sala Penal, c. "C., L.A.", DEL 11/v/1993) (Cfr. D'Albora Francisco J. Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado. Tomo II, Sexta Edición. Lexis Nexis - Abeledo Perrot; pág. 740).

En ese contexto, cabe también recordar que la jurisdicción federal es de carácter excepcional y restrictiva, y está condicionada a la existencia de los hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación.

Dicho ello, cabe expresar una vez más, que los **hechos** que se imputaran a Diana Beatriz Veronesi, Ricardo José Stefani, Melisa A. De Felipe y Leonardo A. Carnevali en las presentes actuaciones, por los que se dictara su procesamiento, por los que el a quo consideró completa la instrucción, y por los que las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

FPA 63/2020/24/CA12

partes acusadoras han solicitado la elevación a juicio, han sido **calificados** en las **figuras de administración fraudulenta** -arts. 173 inc. 7, en función del art. 172 C.P. -; y, en el caso de la primera de los nombrados, **en concurso ideal con el delito de uso de documento privado falso** art. 296 en función del art. 292 del C.P., sin que surja afectación a interés federal que permita sostener la **resolución del juez a quo.**

Con relación a la primera de las figuras, cabe referir que para el caso de que el autor sea un individuo que desempeña funciones de administración por haber sido designado para tal misión por autoridades competentes, y los bienes pertenezcan al Fisco, su acción defraudatoria se debería subsumir en la agravante de la defraudación a una administración pública, prevista y reprimida en el art. 174 inc.5° C.P. (cfr. D'Alessio Andrés J. -Director-, Divito, Mauro A.- Coordinador-; Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, La Ley; 2da. Edición, Actualizada y Ampliada; Tomo II Parte Especial; pags. 721/722), lo que no ha sucedido en autos.

Del mismo modo cabe expresar que *"la defraudación se produce en perjuicio de una Administración Pública cuando el delito lesiona la propiedad de un ente del Estado, sea nacional, provincial, municipal o empresa mixta con capitales del Estado"* (cfr. Estrella Oscar A.; Godoy Lemos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Roberto; Código Penal, Parte Especial - De los Delitos en particular. Hammurabi; 2da. Edición; Tomo 2, pág. 624); y solo en el caso de que la propiedad afectada o lesionada pertenezca al Estado Nacional, es decir, que tenga entidad suficiente para afectar directa y efectivamente las rentas de la Nación (doctrina de Fallos: 316:2509 y 319:237) -circunstancia ausente en este caso-, podría contemplarse la posibilidad de que los hechos en estudio sean constitutivos de afectación a intereses federales y, consecuentemente, competente este fuero.

Iguales consideraciones pueden realizarse con relación a la figura solo enrostrada en concurso ideal a Veronesi -uso de documento **privado** falso-, que como obvia consecuencia ha descartado que el documento o instrumento falso que habría utilizado sea uno de los que *"con las debidas formalidades legales, autorizan los **oficiales públicos** o quienes sin serlo se hallan legitimados por el Derecho vigente para actuar como tales"* (Cfr. Baigún, David; Zaffaroni Eugenio R. -Dirección -, Terragni Marcos A. -Coordinación-; Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y Jurisprudencial. 1º Edición, Hammurabi, Buenos Aires, Tomo 11, pág. 516) lo que podría llevar a considerar la participación de oficial público federal para contemplar la competencia de excepción, lo que tampoco ha sucedido.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Así, la circunstancia referida a la hipotética y eventual investigación sobre otros delitos, en razón de la cual se solicitara la extracción de copias a los fines de continuar la investigación de los hechos relacionados con posibles delitos contra el régimen económico, tributario, y/o cambiario, no altera lo expuesto sobre la competencia de la justicia local con relación a los delitos por los cuales se requiriera la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la causa, estabilizando así en forma más firme aún la imputación contra los recurrentes.

En este sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo propios los fundamentos y conclusiones del dictamen del Sr. Procurador Fiscal en la causa "Competencia N° 521 XLVIII, Bertora, Agustín y otros s/ defraudación, falsificación material de documento y uso o adulteración certificado falso" de fecha 16/10/2012, donde entendió en una contienda negativa de competencia trabada entre los titulares del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 y del Juzgado de Garantías N°1, ambos con asiento en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Del dictamen del Procurador surge que la denuncia atribuía a los allí imputados la ejecución durante su gestión como administradores de diferentes actos en perjuicio de una empresa: transferencias





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

bancarias no autorizadas de dinero procedente del extranjero, gastos personales, retiro indebido de cierta suma de dinero, desvíos de fondos, retiro sin autorización de material de la fábrica, falsificación de documentos de la sociedad entre otros; y también la posible comisión del delito descripto en el artículo 9 de la ley 24.769.

El Juzgado Federal, se reservó el conocimiento de la presunta violación a la ley penal tributaria y declaró su incompetencia material respecto de la administración fraudulenta en favor de la justicia ordinaria.

La CSJN le dio la razón remitiendo al dictamen referido en cuanto sostuvo que *"el objeto procesal de la presente causa, y materia de este conflicto, consistiría en una única administración que, en principio, sería fraudulenta en los términos del artículo 173, inciso 7º, del Código Penal, delito cuya naturaleza es eminentemente local"*.

Así, por todo lo expuesto y, en virtud de lo dispuesto por los arts. 33, 35 y ccdtes. del CPPN, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Carnevali y de De Felipe; revocar la resolución recurrida y declarar la incompetencia del fuero federal para entender en las presentes actuaciones.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 63/2020/24/CA12

Las Dras. **Cintia Graciela Gomez y Beatriz Estela Aranguren**, dijeron: Que, adhieren al voto precedente.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Leonardo Carnevali y de Melisa De Felipe y, en consecuencia, revocar la resolución de fs. 43/47, en cuanto no hace lugar al planteo incompetencia formulado por el Dr. Fabián Moreno Navarro, y declarar la incompetencia del fuero federal para entender en las presentes actuaciones, de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE CÁMARA

